

EL RECUADRO

Han pasado más de nueve meses desde las elecciones del pasado 21 de diciembre de 2015 y por el camino se ha agotado una legislatura estéril, se han celebrado otras elecciones el 26 de junio, con resultados muy similares que podrían volver a abocar a otra legislatura inútil, y, por último, se han celebrado elecciones autonómicas en Galicia y el País Vasco sin que sus resultados hayan servido para romper ninguno de los encastillamientos previos.

Mientras tanto, ajena a ensimismamientos, tacticismos y políticas de corto alcance, la economía real no ha dejado de registrar mejoras: Inversión, Contratación, Carteras de Pedidos, Creación de Empleo, Proyectos de Expansión, Planes de Internacionalización, Exportaciones...

A pesar de la incertidumbre de esos últimos nueve meses, en todos los ámbitos sectoriales y geográficos del país, las empresas han hecho su trabajo, han sabido aprovechar las oportunidades y han sido fuente de buenas noticias. Y todo ello a pesar de un escenario de provisionalidad que tiende a frenar los proyectos empresariales.

Cabría preguntarse qué estaría ocurriendo en una situación de normalidad política. Es decir, con un Gobierno capaz de llevar adelante las reformas que se exigen para continuar con la recuperación, y con un Parlamento activo que rescatase al país del actual limbo legislativo en el que se encuentra.

Sólo hay una respuesta: las empresas estarían generando más actividad y creando más riqueza y generando más y mejor empleo.

Pero, situados ya en el punto en el que se intuyen nuevas elecciones, la cuestión no es sólo esa mejoría que hubiera podido conseguirse, si no la posibilidad real que amenaza a nuestra economía, la de retroceder y desandar el camino recorrido, con mucho esfuerzo, desde que comenzó a superarse la crisis.

Conservar la solidez conseguida en los últimos meses depende de un Gobierno en funciones que tiene vedadas muchas decisiones de calado. Empezando por fijar el techo de gasto, cumplir los objetivos de déficit, y elaborar la Ley de Presupuestos, pasando por definir una política económica que fomente el crecimiento y las prioridades de inversión pública, y terminado por acabar con la inseguridad que genera en los inversores externos e internos la actual imprevisibilidad.

Atraer inversión y generar empleo exige confianza, la que, en primer lugar debería ofrecer el Gobierno estable y previsible que no se ha podido constituir en nueve meses. Y ese bloqueo político y administrativo empieza a tener consecuencias reales y muchos indicadores económicos empeoran.

Las ventas de las grandes empresas, el consumo de electricidad o el de cemento, la matriculación de vehículos, la inversión productiva extranjera o la licitación pública de todas las administraciones se están deteriorando.

Para consolidar el ritmo de crecimiento conseguido en 2015 y en lo transcurrido de 2016, es necesario impulsar la inversión y el consumo, porque la inercia se está agotando. Y nadie invierte y planifica el futuro sin ese mínimo de previsibilidad y estabilidad que la actual situación política no asegura.

Se necesita de manera urgente un Gobierno capaz de continuar los ajustes y reformas de los últimos años, de afrontar la reducción de costes fiscales y laborales y de enfrentarse a una simplificación administrativa.

Esas son condiciones sine qua non para aumentar la competitividad de nuestra economía, asegurando la creación de empleo y la sostenibilidad de nuestro estado del bienestar.